

Más allá de la “barbarie” de Boko Haram ¿Qué pasa en el norte de Nigeria?

Itziar Ruiz-Gimenez

En los últimos dos años los medios de comunicación globales han dirigido de manera creciente su mirada hacia las actuaciones del grupo armado nigeriano conocido como *Boko Haram*¹. El año pasado, en abril, el secuestro de 276 niñas en la escuela de Chibok y, sobre todo, la movilización posterior de sus familiares y de la sociedad civil nigeriana convertían a *#BringBackOurGirls* en un *trending topic* global. Desde entonces, periódicamente aparece alguna noticia sobre las incursiones armadas de dicho grupo en los estados del norte de Nigeria, sobre sus atentados suicidas en Lagos, Abuja o en Maiduguri (incluso con niños de corta edad), o sobre un nuevo secuestro en enero de 2015 de otras 500 niñas en Baga.

Salvo algunas honrosas excepciones, la mayoría de las noticias se limitan a mostrar la violencia de *Boko Haram* y a repetir como un mantra que se trata de un grupo islamista radical que quiere imponer un califato (con una versión extrema de la *sharia*) en el norte de Nigeria, atacando a todo lo que perciben como occidental (escuelas, iglesias, centros de salud, etcétera). Esta cobertura mediática presenta como elemento positivo la atención prestada a las gravísimas violaciones de derechos humanos que ha cometido dicho grupo. Según Amnistía Internacional, solo en los últimos dos años, *Boko Haram* habría asesinado a más de 5.400 personas, asaltado y saqueado más de 350 poblaciones, secuestrando a cientos de mujeres, niñas y niños para someterlos a matrimonios forzados, a esclavitud sexual, u obligarlos a ser soldados o “suicidas”, etcétera².

Se trata, sin embargo, de una narrativa que ayuda muy poco a entender qué está ocurriendo en el norte de Nigeria. Su énfasis en situar las causas del conflicto en el fundamentalismo religioso de *Boko Haram* y en resaltar sus vínculos con la red de Al Qaida en el Sahel sirve, sobre todo, para reforzar un discurso que sitúa en la diferencia cultural, religiosa o étnica las causas de la violencia armada en África. Una narrativa que Mark Duffield (2003) denominó el Nuevo Barbarismo y que es sumamente peligrosa porque tiende a esencializar las identidades etno-religiosas, a criminalizar la diferencia cultural (o el Islam)

1/ Y que en realidad se denomina *Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad* (Grupo Suni para la Predicación del Islam).

2/ Se pueden ver sus informes y comunicados en www.es.amnesty.org/paises/nigeria/.

“Tras su fundación, su discurso público contra la corrupción del gobierno nigeriano encontraba mucho eco en parte de las elites político-religiosas del norte de Nigeria y, sobre todo, en amplios sectores de la población.”

y a invisibilizar los procesos políticos (y sus responsables) que en Nigeria (o en los países occidentales) buscan reconstruir las identidades culturales en términos no de inclusión sino de exclusión de los “otros”.

Por ello, y para entender lo que ocurre hoy en Nigeria, para comprender por qué se ha radicalizado un conflicto armado que se inició en el año 2002 y hoy en día se ha extendido a toda la región del Lago Chad, necesitamos descorrer el velo del “fundamentalismo religioso” y del “terrorismo internacional” y recuperar la política y la historia. Es decir, es preciso abordar los múltiples factores políticos, sociales, económicos y culturales que,

tanto en Nigeria como en el ámbito regional e internacional, confluyen en el origen y evolución de este conflicto armado. Complejidad que difícilmente se puede abordar en profundidad en la extensión de este artículo por lo que solo se van a resaltar algunos hitos.

Sería necesario, por ejemplo, rescatar la evolución histórica de *Boko Haram*. Tras su fundación por Ustaz Mohammend Yusuf en el año 2002, sus ataques se dirigieron inicialmente contra comisarías y edificios públicos en los estados de Borno o Yobe. Por entonces, su discurso público contra la corrupción del gobierno nigeriano encontraba mucho eco en parte de las elites político-religiosas del norte de Nigeria y, sobre todo, en amplios sectores de la población (especialmente entre los jóvenes) que se sentían con razón excluidos y marginados por el Estado nigeriano. Una historia de exclusión y agravios que se remonta a los tiempos de la colonización británica (1884-1960), al de las sucesivas juntas militares (1966-1999) pero que pervive desde la llegada de la democracia en 1999. No es casual que los estados del norte de Nigeria presenten hoy en día los peores indicadores de todo el país en pobreza, desigualdad, acceso a educación y sanidad, mortalidad materna e infantil, etcétera. Hablamos, no debemos olvidarlo, de un país que es una de las dos grandes potencias africanas (junto a Sudáfrica) y la octava potencia petrolera del mundo (y primera de África) con importantes tasas de crecimiento económico en los últimos años. Dicha riqueza ha sido, sin embargo, acaparada fundamentalmente por la elite político-económica (en especial del sur) considerada, por el propio Banco Mundial, una de las más corruptas del mundo (International Crisis Group, 2014). Esa riqueza, por el contrario, no ha revertido en la mayoría de la población nigeriana. Más del 70% de sus 166 millones de personas vive por debajo del umbral de la pobreza, en asentamientos precarios, sin acceso a agua potable, con riesgo de sufrir desalojos forzados o, en el caso del Delta del Níger, sufriendo la contaminación y los vertidos de empresas petroleras como la Shell o la italiana ENI. Indicadores que, en muchos

casos, alcanzan las peores cifras en los estados donde opera *Boko Haram*. Muy pocos análisis político-mediáticos mencionan, sin embargo, estos datos. Mucho menos señalan a quienes son los responsables de esa desigual distribución de riqueza, de ese descontento y creciente sensación de agravio e injusticia que siente la mayor parte de la población nigeriana (y en especial en el norte). Me refiero al gobierno y la elite político-económica nigeriana, pero también, a las empresas multinacionales petroleras, a los gobiernos del Norte (aliados tradicionales de Nigeria) y sus sociedades (cuyo estadio de desarrollo y bienestar depende fuertemente del petróleo). Sin olvidar la responsabilidad del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional cuya insistencia en las políticas de austeridad también ha contribuido al empobrecimiento y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la población nigeriana.

Sería también importante recordar cómo fue en el año 2009 cuando *Boko Haram* radicalizaba sus ataques tras la detención y muerte bajo custodia de centenares de sus integrantes, incluidos varios de sus líderes y entre ellos su fundador, Yusuf, que era sustituido por su lugarteniente Aboubakar Shekau. A partir de entonces, la violencia armada de dicho grupo se dirigió no solo contra las fuerzas de seguridad nigerianas, sino también contra escuelas, iglesias (cristianas o musulmanas) y contra aldeas y ciudades enteras reforzando su deseo de creación de un califato en el norte del país. Aspecto que resulta necesario contextualizar incluyendo en el análisis la respuesta del gobierno nigeriano, que no ha hecho más que aumentar la espiral de violencia, profundizar los agravios e incitar a muchos jóvenes a sumarse a la lucha armada, etcétera. Para ello sería necesario resaltar cómo, desde el inicio del conflicto, dicho gobierno emprendía en nombre de la lucha contra el terrorismo, una brutal represión policial y militar³. Múltiples pero invisibles para la comunidad internacional han sido, desde entonces, los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha denunciado cómo más de 1.500 personas habrían muerto bajo custodia por ejecuciones extrajudiciales, víctimas de la tortura o como resultado de las inhumanas condiciones de las cárceles. También ha documentado cómo cientos de personas permanecen detenidas sin ser juzgadas, a veces durante meses o años y por la mera sospecha (muchas veces infundada) de cercanía, simpatía o pertenencia a *Boko Haram*. Todo ello con la más absoluta impunidad y amparándose en el “estado de emergencia” declarado por el gobierno de Goodluck Jonathan en el 2013.

Esta estrategia antiterrorista del “todo vale” es además llevada a cabo por unas fuerzas de seguridad en las que, según algunas fuentes, imperan por un lado, la rampante corrupción de sus líderes militares y, por otro, los escasos salarios e inadecuadas condiciones de vida de sus soldados que,

³/ Represión a la que, en los últimos años, se sumaron las milicias progubernamentales denominadas la Fuerza Especial Conjunta Civil.

en muy diversas ocasiones, terminan desertando y uniéndose a *Boko Haram*. Especialmente preocupante es, sin embargo, la clamorosa falta de voluntad política del gobierno nigeriano (con la silenciosa complicidad de la comunidad internacional) de situar la protección de la población civil en el centro de esa estrategia. Tanto es así que Amnistía Internacional ha denunciado cómo dicho gobierno nigeriano fue avisado previamente del posible ataque de *Boko Haram* a la escuela de Chibok (abril del 2014) o a las ciudades de Baga y Monguno (enero del 2015) sin que adoptara medida alguna para intentar proteger a las niñas o a la población civil (Amnistía Internacional, 2015).

Todos estos aspectos son olvidados o silenciados por la narrativa hegemónica, lo que ha facilitado el silencio (y la complicidad) internacional ante el comportamiento del gobierno nigeriano. Especialmente significativa es la postura de los países occidentales, en especial de Estados Unidos y el Reino Unido que, en el año 2013, incluían a *Boko Haram* en su lista de terroristas. Lo mismo hacía en mayo del 2014 el Comité de Sanciones contra Al-Qaida del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas⁴. Nada decían, sin embargo, de las reiteradas violaciones de derechos humanos del gobierno nigeriano en nombre de la “seguridad nacional” y la “lucha antiterrorista”. No es casual que dichos países (al igual que muchos otros, incluido España) también hayan llevado a cabo, en nombre de esa misma lucha, políticas restrictivas de los derechos humanos. Aunque medidas como las adoptadas por la administración Bush en su “Guerra contra el Terror” (Guantánamo, la legalización de la tortura, las prisiones secretas, etcétera) parecerían haber quedado atrás, subsisten muchas otras medidas que reflejan el reforzamiento del proceso de securitización emprendido por muchos países (en especial los occidentales) y que estaría ampliando peligrosamente los “estados de excepción”, las reformas legislativas limitativas de derechos (de los detenidos, de la libertad de expresión, manifestación o protesta) o discriminatorias contra las minorías (población migrante, musulmanes) que residen en su territorio, etcétera.

Es, por tanto, en este contexto internacional de securitización en el que se debe analizar la actuación del gobierno nigeriano y el proceso de regionalización del conflicto. En el año 2012 Nigeria impulsaba la creación de una fuerza conjunta multinacional (MNJTF) de unos 8.700 soldados del Chad, Níger, Nigeria y (desde hace poco) Camerún y Benín para luchar contra *Boko Haram*. Por su parte, dicho grupo intensificaba también sus vínculos con otros grupos islamistas que operan en la región del Sahel. Aunque International Crisis Group sitúa a principios de los 2000 los primeros contactos con las redes de Al Qaida, existe cierto consenso en los especialistas de que *Boko Haram* respondía a causas y dinámicas internas y que solo en los últimos años habría

⁴/ Decretaba contra *Boko Haram* sanciones financieras selectivas y un embargo de armas.

fortalecido sus vínculos internacionales, recibiendo, según algunas fuentes, armas y adiestramiento militar de la red Al Qaeda. Gracias a dicho apoyo, *Boko Haram* habría conseguido consolidar su poder en el norte de Nigeria, donde, se especula, cuenta con más de 15.000 integrantes divididos entre tres y seis facciones⁵. Habría también mejorado su capacidad de actuación en Camerún y Chad con atentados al parecer en respuesta a la participación de estos países en la fuerza multinacional regional. También se ha producido un claro proceso de radicalización de sus posturas y mensajes ideológicos, llegando incluso a anunciar el pasado 28 de marzo su adhesión formal al Estado Islámico (EI) y a su líder Abu Bakr Al Baddadi.

Y en medio de esa espiral de violencia armada se encuentra la gran olvidada, la población civil nigeriana (o de los países limítrofes) con numerosísimas bajas y con centenares de miles de personas obligadas a huir y refugiarse en los alrededores del lago de Chad en condiciones sumamente precarias y prácticamente olvidadas por una comunidad internacional que, en lugar de asistirle y protegerla, centra su atención (y recurso) en reforzar la solución militar planteada por el gobierno de Goodluck Jonathan.

Nos encontramos, por tanto, con un proceso de regionalización e internacionalización del conflicto armado claramente favorecido por la narrativa hegemónica que etiqueta a *Boko Haram* como un grupo fundamentalista y vinculado a la red Al Qaida. Una narrativa que acaba convirtiendo el conflicto en uno de los escenarios de la “Guerra contra el Terror” y legitimando la creciente colaboración militar con Nigeria no solo de los países limítrofes sino de otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, o España. Países que tras la enorme repercusión internacional del secuestro de Chibol en abril del 2014 se comprometían a ayudar a las fuerzas nigerianas en la liberación de las niñas (en su mayoría todavía hoy desaparecidas).

Resulta interesante detenerse brevemente en ese secuestro o, de forma más general, en la reiterada insistencia de los medios (y políticos) internacionales en las violaciones de los derechos de las mujeres que comete *Boko Haram*. Aunque es, por un lado, un signo positivo que refleja una mayor concienciación sobre la desigualdad de género, resulta cuanto menos curioso la ausencia de referencias a la situación de las mujeres en toda Nigeria, a las elevadas tasas de mortalidad materna, a la discriminación que sufren en el acceso a la educación, al mundo laboral, a su desigual salario o a la pervivencia de legislación estatal sobre la familia, la herencia, el acceso a la tierra que claramente las discrimina. También resulta significativo que, en estos tiempos de elecciones en Nigeria, no haya habido ninguna noticia sobre las tasas tan bajas de representación política de las mujeres que hay hoy día en Nigeria.

⁵/ Entre las que destacaría el Movimiento Islámico Yusufiya (MIY) y Ansura, y esta última es la que comete los secuestros de occidentales (International Crisis Group, 2014).

“Múltiples pero invisibles para la comunidad internacional han sido, desde entonces, los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad.”

Estas otras dimensiones de la desigualdad de género son obviadas por la narrativa hegemónica y de esta forma no se favorece el cuestionamiento de la estrecha relación política, comercial, económica o militar que mantienen con el gobierno nigeriano los mismos estados que luego claman contra *Boko Haram* y el secuestro de las niñas de Chibol. También sirve para que sus gobiernos reconstruyan su propia identidad como “salvadores” de las mujeres y niñas nigerianas cuando todavía tienen mucho camino que recorrer para

acabar con la lacra de la desigualdad e inequidad de género en sus propios países. En este sentido resulta cuanto menos irónico que el gobierno español anunciase el envío de militares españoles para ayudar al rescate de las niñas de Chibok, al tiempo que impulsaba una reforma de la ley de aborto que limita los derechos sexuales o reproductivos o llevaba a cabo importantes recortes en la lucha contra la violencia de género en España.

Con este breve repaso sobre la otra historia del conflicto armado en el norte de Nigeria no se pretende cuestionar las legítimas denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas por *Boko Haram*, aunque sí denunciar cómo la actual narrativa hegemónica reconstruye dicho conflicto como producto exclusivo de la violencia bárbara, salvaje, irracional del fundamentalismo religioso de *Boko Haram*. Y de esta forma se legitima una solución exclusivamente militar (también ella profundamente vulneradora de los derechos humanos) y, sobre todo, se invisibiliza el complejo conjunto de factores locales, nacionales e internacionales que confluyen en dicho conflicto y que requerirían un abordaje mucho más integral que la actual lucha antiterrorista emprendida en Nigeria (y en otros países del Sahel).

Itziar Ruiz-Giménez es coordinadora del Grupo de Estudios Africanos (GEA) y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es editora del libro *Más allá de la barbarie y la codicia: historia y política de las guerras*, Editorial Bellaterra, Barcelona, 2012.

Bibliografía citada

- Amnistía Internacional (2015) “Nigeria: Las autoridades estaban advertidas de los ataques de Boko Haram contra Baga y Monguno”. 28/1/2015. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/paises/nigeria/noticias-relacionadas/articulo/nigeria-las-autoridades-estaban-advertidas-de-los-ataques-de-boko-haram-contr-baga-y-monguno/>.
- Duffield, M. (2003) *Las nuevas guerras en un mundo global*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- International Crisis Group (2014) “Curbing violence in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency”. Informe n.º 216, abril, p. 2.